

TÍTULO:	AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO. ACTIVOS Y PASIVOS DEL EXTERIOR
AUTOR/ES:	Amaro Gómez, Richard L.
PUBLICACIÓN:	Práctica y Actualidad Tributaria (PAT)
TOMO/BOLETÍN:	XXV
PÁGINA:	3
MES:	Setiembre
AÑO:	2019
OTROS DATOS:	-

RICHARD L. AMARO GÓMEZ

AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO. ACTIVOS Y PASIVOS DEL EXTERIOR

El artículo tiene por finalidad analizar algunas cuestiones en relación a la técnica del ajuste por inflación, de aquellos activos y pasivos monetarios del exterior (incluyendo colocaciones financieras) que no generen renta de fuente argentina o que no estén afectados a actividades generadoras de renta de fuente argentina.

INTRODUCCIÓN. UN POCO DE HISTORIA

Recordemos que la técnica de liquidación del ajuste por inflación del [Título VI de la ley de impuesto a las ganancias](#), basado en un ajuste estático y otro dinámico, no permite considerar aquellos activos y pasivos monetarios del exterior (incluyendo colocaciones financieras) que no generen renta de fuente argentina o que no estén afectados a actividades generadoras de dicha renta. Ello, por imperio del [artículo 95, inciso a\), punto 8, de la ley](#). En definitiva, las inversiones en el exterior no se deben considerar, a los fines de cuantificar el resultado generado en un período fiscal, por las variaciones del poder adquisitivo de la moneda.

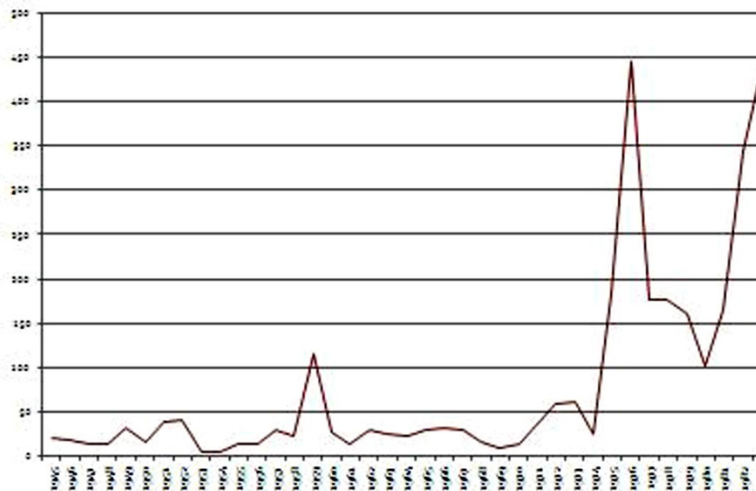
Ello se debe a que cuando se sancionaron las leyes que posibilitaron el ajuste por inflación impositivo, las rentas de fuente extranjera estaban fuera del ámbito de imposición del tributo de marras creado en 1973. Lo expuesto, debido a que, por aquel entonces, se aplicaba el criterio de la fuente como atributivo de la potestad tributaria y en virtud del cual las ganancias generadas en el ámbito territorial de nuestro país eran las sometidas al gravamen.

Luego, ello cambió radicalmente por la adopción del criterio de la renta mundial en base al cual tanto las ganancias de fuente argentina como las de fuente extranjera, siempre que se trate de un residente, quedan alcanzadas por el ámbito del tributo. De esta manera, cuando se produjeron estas modificaciones, quedó el marco normativo relativo al [Título VI](#) desactualizado, dado que no permite ajustar las inversiones del exterior.

iHagamos un poco de historia!

La inflación en nuestro país es un fenómeno que algunos historiadores lo identifican desde la década de 1940 en adelante, con picos muy ascendentes en la década de 1980, como se ve en el cuadro siguiente:

HISTORIA: 1945 A 1991 - IPC



En ese contexto, en 1978 se sancionó la ley 21694, en la cual se consideró que estaban dadas las condiciones a fin de establecer un mecanismo de ajuste por inflación general, global, permanente y obligatorio, pero utilizando una técnica muy simplificada con relación al ajuste integral contable, con el cual, en la realidad de los hechos, no tenía nada que ver debido a sus serias limitaciones.

Y en razón de las serias limitaciones del ajuste estático, en 1985 tuvimos la sanción de la [ley 23260](#), a través de la cual se agregó el ajuste dinámico, tanto positivo como negativo, a fin de corregir el resultado reflejado por medio del ajuste estático, lo cual implicó todo un avance considerando que este nuevo ajuste permite reconocer básicamente las variaciones del activo monetario con el objeto de considerar su evolución durante el ejercicio.

En este marco normativo, en el año 1992 la [ley 24073](#) introdujo el criterio de renta mundial alcanzado de este modo y, finalmente, a las rentas de fuente extranjera obtenidas por residentes en el país sin dar mayores precisiones, lo cual creó una gran laguna normativa. Pero debemos precisar que no fue sino hasta el año 1998 en el cual se sancionó la [ley 25063](#), en la que se precisó específicamente los alcances de la gravabilidad de las rentas en el marco del criterio de renta mundial.

En consecuencia, el [Título IV](#), que recepta la normativa del ajuste por inflación, es muy anterior al criterio de renta mundial plasmado en la ley, lo que hace que no se contemple la técnica del ajuste.

LA INCIDENCIA EN LA TÉCNICA DEL AJUSTE

Si bien no es el objetivo de este artículo hacer un repaso de la técnica de liquidación, lo cierto es que si consideramos la misma en general, los activos monetarios sujetos a los vaivenes de la inflación son los siguientes:

1. Caja y bancos.
2. Inversiones (títulos valores).
3. Créditos comerciales.
4. Otros créditos.
5. Bienes de cambio.
6. Otros activos (bienes muebles no amortizables).

Aunque debemos indicar que los bienes de cambio no constituyen un activo monetario, sino que son considerados como tales con la finalidad de contemplar a la inflación en el costo de la mercadería vendida del ejercicio.

En cuanto a los pasivos, básicamente tenemos las deudas, las provisiones y las previsiones siempre que sean admitidas por la ley por los importes que ella autoriza.

A esta altura del análisis hay que ponderar que si debemos excluir del activo las inversiones en el exterior, del mismo modo deberíamos proceder con los pasivos relacionados con las mismas. Lo expuesto resulta coherente considerando el seguimiento de un mismo criterio. Aparte, en aquel entonces, cuando se sancionó la ley, los pasivos mencionados, al no estar relacionados con rentas de fuente argentina o con actividades generadoras de dicha renta, también debían excluirse.

En definitiva, los activos computables deben tratarse de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en nuestro país ([art. 5, LIG](#)), de modo tal que generen ganancias de fuente argentina. Caso contrario, generarán ganancias de fuente extranjera ([art. 127, LIG](#)), y por lo tanto, como esas rentas estaban fuera del objeto del gravamen, no son susceptibles de tenerse en cuenta para la técnica del ajuste.

Lo expuesto implica que hay una parte del activo que es monetario y que en la realidad económica está expuesto a las variaciones del poder adquisitivo de la moneda generando un resultado, pero que no se puede reconocer. Y si no se reconoce, ello tiene incidencia en la base de imposición del tributo por no poder cuantificarse en términos reales. Incluso puede llegar a ocasionar que la ganancia así determinada no sea representativa de la real capacidad contributiva.

En este sentido, Luis Omar Fernández señala lo siguiente:

"Distinto es el caso de estas inversiones afectadas a obtener rentas de fuente extranjera, que son las que efectivamente se eliminan; la razón del tratamiento está en el criterio de la fuente imperante cuando se dictó la ley: al estar gravadas solo las rentas de fuente argentina, no tenía sentido proteger inversiones cuyos frutos estaban fuera del ámbito del tributo.

Actualmente, el criterio de atribución de las rentas a los sujetos las incluye en su totalidad para los residentes, por lo que la situación es diametralmente opuesta y sería de toda justicia eliminar el punto 8 del inciso a) del artículo 95, dando a las inversiones que producen renta de fuente extranjera el mismo tratamiento que las que producen renta de fuente argentina. No obstante ello, la ley merecería una revisión que coordine estas normas para hacerlas compatibles, ya que el mecanismo de determinación del impuesto de fuente extranjera acepta los sistemas de ajuste por inflación que eventualmente existan en los países donde aquel se obtenga y, además, los quebrantos de dicha fuente tienen un tratamiento cedular, que también debe ser considerado".(1).

En este marco, traigamos a la memoria que el [artículo 154 de la ley del impuesto](#) dispone una suerte de actualización para sujetos del país que poseen bienes en el exterior.

Al respecto, el primer párrafo del artículo citado dispone que cuando los países en los que están situados determinados bienes (bienes muebles e inmuebles amortizables, intangibles, activos financieros variables y fijos), o aquellos en los que estén instalados los establecimientos permanentes de cuyo activo formen parte los bienes citados, admitan en sus legislaciones relativas a los impuestos análogos al de esta ley la *actualización de sus costos* a fin de determinar la ganancia bruta proveniente de su enajenación, o adopten *ajustes de carácter global* que causen el mismo efecto, los costos de los referidos bienes podrán actualizarse desde la fecha en la que, de acuerdo con los mismos, deben determinarse hasta la enajenación, en función de la variación experimentada en dicho período por los índices de precios o coeficientes elaborados en función de dicha variación que aquellas medidas consideren, aun cuando en los ajustes antes aludidos se adopten otros procedimientos para determinar el valor atribuible a todos o algunos de los bienes incluidos en este párrafo.

Asimismo, se aclara en el segundo párrafo que si los países aludidos no establecen en sus legislaciones impuestos análogos al de la ley, pero admiten la actualización de valores a los efectos de la aplicación de los tributos globales sobre el patrimonio neto, o sobre la tenencia o posesión de bienes, los índices que se utilicen en forma general a esos fines podrán ser considerados para actualizar los costos de los bienes ya indicados.

En definitiva, lo que se permite para bienes situados en el extranjero, y siempre que se den las premisas establecidas en el [artículo 154](#), es la actualización de los costos de los bienes en caso de enajenación o amortización. Pero lo expuesto aplica para determinados bienes y, además, no permite el reconocimiento del resultado producido por activos y pasivos monetarios del exterior.

Por su parte, Armando Lorenzo y César M. Cavalli han sostenido lo siguiente:

"Según la definición de la ley, los activos y pasivos afectados a la obtención de ganancia de fuente extranjera no resultan computables a los fines del ajuste por inflación impositivo.

Tal definición proviene de una instancia en la cual dicha ganancia quedaba fuera del objeto del impuesto, razón por la cual no resultaba necesaria su adecuación conforme los efectos de la inflación.

Esa instancia, como sabemos, es ahora diferente, ya que la ganancia de fuente extranjera está gravada, al igual que las diferencias de cambio vinculadas, lo que hace necesario el reconocimiento de los efectos de la inflación sobre tales ganancias.

Lamentablemente, el legislador que dispuso la inclusión en el objeto del impuesto a las ganancias de fuente extranjera se dejó llevar por el marco legal imperante en tal momento, signado por el no reconocimiento de la inflación (que tampoco existía en medida relevante, por cierto), y no contempló el desfase que se estaba creando (es decir, no adecuó la normativa sobre ajuste por inflación a la nueva realidad de gravabilidad de la renta mundial).

Ello obliga a los contribuyentes obligados a aplicar el Título VI de la ley a desarrollar una construcción teórica del procedimiento necesario para contemplar el efecto de la inflación en la determinación de la renta de fuente extranjera; dicha construcción debe estar en línea con los principios generales de la ley, por lo que implica incluir en el activo computable aquellos activos que generen ganancia imputable al período fiscal.

Una línea argumental que respalda la conclusión precedente es que la exclusión dispuesta por el punto 8 del inciso a) del artículo 95 de la ley de impuesto a las ganancias -que tiene su correlato en el punto 16) del mismo inciso, en lo que respecta a erogaciones no deducibles- se asienta en la naturaleza de ganancia no sujeta a impuesto que las rentas de fuente extranjera exhibían a la fecha de sanción de la norma; en consecuencia, no cabría interpretar la exclusión en cuestión como referida específicamente a las inversiones generadoras de renta de fuente extranjera, sino de rentas excluidas del ámbito de imposición.

Dicha construcción teórica ha sido ya avalada por la Justicia al expedirse en casos en los cuales los contribuyentes invocaron la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de la Nación en la causa 'Candy' y cientos de otras similares, es decir, la inconstitucionalidad de la prohibición de aplicar los mecanismos de ajuste por inflación.

No obstante, tratándose de una situación que seguramente generará conflictos entre contribuyentes y la Administración Fiscal, sería altamente aconsejable que se dispusiera la respectiva aclaración del texto legal".(2).

Luego de estos comentarios debemos recordar que el [artículo 158 de la ley del impuesto](#) establece la posibilidad de diferir las diferencias de cambio de fuente extranjera (resultado por tenencia) hasta tanto se dispongan los fondos del exterior en poder de la empresa local. Si bien ello implica un diferimiento importante, en mi visión no obsta a que los activos y pasivos monetarios no generen un resultado por exposición a la inflación que, de hecho, sí lo hacen, aparte de que esa diferencia de cambio termina impactando tarde o temprano en la determinación del impuesto.

Lo expuesto implica, tal como señala Luis Omar Fernández en la obra ya citada anteriormente, que la aplicación del ajuste por inflación a las rentas de fuente extranjera conlleva a *"...una revisión que coordine estas normas para hacerlas compatibles..."*.

En todo caso, tales activos en el exterior deberían incorporarse como activos sujetos al ajuste por inflación impositivo en el ejercicio en el que generen diferencias de cambio gravadas en el tributo.

Finalmente, nos quedamos con las palabras expresadas por Enrique Reig, Rubén Malvitano y Jorge Gebhardt, en cuanto a que deben adherir *"...a la postura doctrinaria que ha hecho hincapié en la necesidad de que opere una evolución en la normativa analizada que permita hacer cesar toda incertidumbre respecto a la armónica relación que debería existir entre el tratamiento general previsto para determinar el resultado de fuente extranjera y las disposiciones del ajuste por inflación impositivo".(3).*

REFLEXIÓN FINAL

De todo lo expuesto podemos sostener que, en el marco normativo actual, no existe argumento o justificación alguna para no considerar, en la técnica del ajuste por inflación del [Título VI](#), a los activos y pasivos del exterior, máxime si ponderamos la evolución histórica de la normativa.

Aunque el marco normativo necesita de una revisión para la coordinación de la ley.

Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en numerosas causas que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y que cuando la misma resulta clara no cabe más que su aplicación directa, lo cierto es que, al igual que en otras causas, se ha apartado de este criterio cuando la letra por sí sola no era suficiente a los fines interpretativos. En este marco, ha recurrido en ocasiones a la intención del legislador.

En este sentido, la Corte ha dicho lo siguiente:

"Que en una consolidada jurisprudencia el Tribunal ha establecido que si bien la primera fuente de interpretación de las leyes es su letra, la misión judicial no se agota con ello, pues los jueces no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma (Fallos: 327:5295 y el allí citado). En el mismo sentido, ha sostenido que no puede soslayarse que por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente corresponde indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, no resulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuando así lo requiera una interpretación razonable y sistemática (Fallos: 291:181; 293:528; 327:5649), ni es aceptable ajustarse estrictamente a una singular pauta gramatical en desmedro de la racionalidad de la norma (Fallos: 330:2892 y el allí citado). En particular, el Tribunal ha expresado que las normas impositivas no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla (Fallos: 243:204), y aun cuando rija la proscripción de la aplicación analógica o extensiva de la ley -como ocurre en el ámbito del derecho penal y tributario-, ello no excluye una exégesis que esclarezca la voluntad del legislador, a fin de que ella se cumpla de manera razonable y discreta (Fallos: 182:486; 232:254; 237:33; 239:367; 252:139; 254:362; 256:277; 326:2987)...".
(4)

En este contexto, si nos ceñimos a la racionalidad de la norma y a la intención del legislador, la cual era dejar afuera los activos y pasivos relacionados con rentas exentas o no alcanzadas, no cabría duda de que la conclusión sería que lo expuesto trasladado al día de hoy no sería aplicable para las inversiones en el exterior. Una correcta aplicación del principio de equidad tributaria llevaría también a dicha conclusión.

Tal vez nos podamos preguntar si aquí deberíamos sostener que la imprevisión, o la falta de previsión de la legislación, no se puede suponer, como tantas veces lo dijo la Corte, ya que han pasado numerosas reformas y el [Título VI](#) en este aspecto no se ha reformado. Por ende, no podemos suponer que fue un olvido a través de la historia. No obstante, creo que en este caso puntual ya no se trata de imprevisión, sino de la aplicación racional de la normativa impositiva, de modo tal que la ganancia determinada conforme a las normas de la ley sea representativa y no meramente ficta.

Por otra parte, es cierto que la Corte ha dicho que no se puede juzgar la bondad o eficacia de la normativa dictada por el Congreso Nacional en la medida en que no afecten derechos amparados por la Constitución Nacional, pero creemos que aquí la cuestión pasa por interpretar el espíritu de la norma y la intención de su legislador.

Esperemos pronto tener novedades sobre este tema.

Notas:

- (1) Fernández, Luis O.: "Impuesto a las ganancias" - LL - Bs. As. - 2019 - págs. 74 y 75
- (2) Lorenzo, Armando y Cavalli, César M.: ["Ajuste por inflación impositivo \(Título VI\): su aplicación práctica"](#) - ERREPAR - Consultor tributario - N° 149 - julio/2019 - Cita digital EOLDC099853A
- (3) Reig, Enrique J.; Gebhardt, Jorge y Malvitano, Rubén: "Impuesto a las ganancias" - Ed. ERREPAR - Bs. As. - pág. 752
- (4) ["San Juan SA \(TF 29974-I\) c/DGI"](#) - CSJN - 27/10/2015 - Cita digital EOLJU172650A